



Reseñas



# Movimientos sociales rurales en América Latina: en el ojo de la tormenta

## (Rural Social Movements in Latin America. Organizing for Sustainable Livelihoods)

*Rural Social Movements in Latin America. Organizing for Sustainable Livelihoods*, editado por Carmen Diana Deere y Frederick S. Royce. Gainesville, FL: University Press of Florida, 2009. Pp. 357. US\$ 75.00 (hb). ISBN 978-0-8130-3332-7

*¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas? Estado, movimientos sociales campesinos y soberanía alimentaria*, editado por Jordi Gascón y Xavier Montagut. Barcelona: Icaria Editorial, 2010. Pp. 264. €17 (pb). ISBN 978-84-9888-228-5

*Campesinato e agronegocio na América Latina: a questão agrária atual*, editado por Bernardo Mançano Fernandes. São Paulo: Conselho Latino-americano de Ciências Sociais and Expressão Popular, 2008. Pp. vii+424. US\$ 11.00 (pb) ISBN 85-7743-0857

*Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento*. Raúl Zibechi. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007. Pp. 314. US\$ 11.60 (pb). ISBN 978-9972-834-25-7

*Palabras claves*: movimientos sociales agrarios, América Latina, neoliberalismo, agroindustria.

---

### Introducción

Actualmente los movimientos campesinos en América Latina presentan un carácter vivaz académica y políticamente. Durante las últimas dos décadas, los movimientos sociales rurales han sido el sustento de la izquierda latinoamericana, logrando agitar las agendas de gobiernos en algunos países del continente. Se han presentado como la vanguardia de la movilización social en contra del neoliberalismo; han derribado gobiernos; han provisto apoyo a gobiernos nacionalistas de izquierda y populistas; y se han involucrado en la lucha global en contra de las transnacionales de agroindustria a través de la *Vía Campesina* o la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). En varios países de la región, movimientos indígenas y campesinos han logrado niveles sin precedentes de unidad y cohesión. El catalizador de su unidad ha sido su oposición al neoliberalismo, al

---

\* Texto original: Vergara-Camus, L. (2013), Rural Social Movements in Latin America: In the Eye of the Storm. *Journal of Agrarian Change*, 13: 590–606. doi:10.1111/joac.12030  
Traducción: Caitlin Dube, Estudiante de la Maestría de Desarrollo Territorial Rural, FLACSO-Ecuador.

cual consideran como la fuente de su actual estado de empobrecimiento y marginalización. Frente a dicha situación, como ejemplo, está surgiendo actualmente un modelo alternativo de desarrollo campesino que gira alrededor del concepto de soberanía alimentaria. Sus estrategias pueden haber sido diferentes –por ejemplo, en la manera en que se relacionan con el poder del Estado y las alianzas con partidos políticos– pero sus formas de movilización –incluyendo las marchas nacionales, la organización de las reuniones y encuentros de activistas, tierra y ocupaciones de edificios públicos, y los retos legales frente las decisiones del gobierno a conceder concesiones a las grandes corporaciones privadas– son muy similares.

Sin embargo, estas observaciones no deben ser tomadas como una tendencia regional. Los movimientos sociales campesinos en Latinoamérica durante las últimas dos décadas han presentado trayectorias diversas. Por ejemplo, existen movimientos rurales fragmentados y débiles como sucede en México (de Grammont y MacKinlay, 2009), América Central (Edelman, 2008), Perú, Chile y el Cono sur; y movimientos más dinámicos y eficaces como en Bolivia, Ecuador y Brasil, donde han forzado algún tipo de políticas pro-campesino. Así para los investigadores y activistas, muchas preguntas surgen de las distintas trayectorias y resultados. ¿Cuáles han sido los logros reales de estos movimientos? ¿Qué tipo de políticas agrícolas alternativas han propuesto? ¿Qué efectos han logrado en sus demandas al gobierno central?

El presente ensayo-reseña explora cuatro publicaciones recientes sobre los movimientos sociales agrarios en América Latina. Se pretende identificar sucintamente los logros y problemas de los movimientos sociales agrarios, así como los temas, metodologías y marcos teóricos que los académicos han usado para estudiarlos. Empezaré con proveer un breve repaso del contenido, el objetivo y la originalidad de cada libro, y continuaré con una discusión sobre las tendencias, limitaciones y brechas de cada uno de estos. Finalmente, se realizará un comentario final sobre el conjunto de lo descrito.

*Rural Social Movements in Latin America. Organizing for Sustainable Livelihoods*, editado por Carmen Diana Deere y Frederick S. Royce, es un libro de valor porque presenta un panorama completo de las luchas, logros y propuestas de los movimientos rurales sociales en toda América Latina. El libro está dividido en cuatro secciones que cubren todos los temas principales del desarrollo rural contemporáneo (tierra, autonomía indígena, participación de la mujer, migración, activismo transfronterizo y comercio justo) mediante estudios de casos específicos. La primera sección detalla las características y batallas más centrales que definen el movimiento campesino actual en América Latina. La segunda sección examina las nuevas luchas por la reforma agraria y la autonomía territorial. La tercera sección se enfoca en la búsqueda de una subsistencia sustentable a través de la movilización en contra de la industria extractivista y proyectos de infraestructura. El libro termina con algunos ejemplos de cómo los campesinos se han organizado a través de las fronteras, vinculándose con otros actores y usando redes transnacionales para influir con cambios en varias localidades. Los editores han hecho una excelente selección de estudios de caso, y han logrado un buen

balance entre artículos de académicos y de líderes de movimientos sociales rurales. El libro es una lectura obligatoria para cualquier persona interesada en los movimientos rurales sociales en América Latina, ya que ilustra una descripción detallada de los movimientos o luchas, y las características claves para entender un posible modelo campesino alternativo de desarrollo. Si bien los análisis son excesivamente positivos y a veces no críticos, sirven como un excelente punto de partida para la investigación. Sin embargo, puesto que los capítulos son bastantes cortos, muchas de las contribuciones son débiles en términos de la discusión teórica o de perspectiva comparada.

¿*Cambio de rumbo de las políticas agrarias latinoamericanas? Estados, movimientos sociales campesinos y soberanía alimentaria*, editado por Jordi Gascón y Xavier Montagut, en el cual se exhibe el trabajo de varios autores académicos rurales tales como Miguel Altieri, Víctor Bretón y Peter Rosset, entre otros; además, provee algunas respuestas a varias preguntas planteadas por el libro editado por Deere y Royce. Su objetivo es claramente intentar entender y explicar por qué y cómo ciertos movimientos rurales fueron exitosos en reorientar las políticas estatales agrícolas hacia el principio de soberanía alimentaria de la *Vía Campesina* en Bolivia, Ecuador, Cuba y Venezuela. El libro está organizado en tres puntos focales: primero, ver las “ventajas” inherentes de la agricultura campesina de pequeña escala en contraste con la agricultura industrial de gran escala; segundo, analizar los logros, contradicciones y retos de la estrategia de los movimientos campesinos en cuanto al Estado; y finalmente la adopción de un enfoque histórico que busca identificar la peculiaridad de la situación actual en comparación con el periodo de reformas distributivas de tierra durante la era de ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones). Aparte de participar en la sociología rural crítica, los autores no comparten una línea teórica particular ni abordan un debate teórico específico. El conocimiento extensivo de sus estudios de casos, produce un análisis sofisticado y una evaluación crítica de las políticas estatales actuales de los gobiernos progresistas y su relación con los movimientos campesinos. Las posiciones sobre estos gobiernos y la manera en que los movimientos rurales se han relacionado con ellos varían de optimista (Fernando Mayoga y Miguel Urioste) a crítica pero entusiasta (Juan Pablo Muñoz, Peter Rosset y Jordi Gascón) y plenamente crítica (Víctor Bretón). La conclusión central del libro es que los movimientos campesinos de América Latina han logrado una gran cantidad de sus objetivos de defender su manera de vivir a través de la movilización y/o contribuir con la elección de gobiernos de izquierda. No obstante, es demasiado pronto concluir que esto puede ser la base real para la protección de la agricultura campesina y la emergencia de un modelo de desarrollo diferente (*no desarrollado*).

*Campesino e agronegócio na América Latina: a questao agrária atual*, editado por el geógrafo brasileiro Bernardo Mançano Fernandes, es el resultado de un seminario de investigación patrocinado por el Consejo Latino Americano de Ciencias Sociales (CLACSO) que junta a los académicos rurales y a los investigadores jóvenes de toda la región. El libro es escrito en español y portugués y es una representación bastante fiel de la diversidad de

perspectivas dentro de los estudios rurales de América Latina. El libro incluye capítulos que buscan abordar temas teóricos; capítulos sobre las formas de control ejercido por grandes agroindustrias en sectores específicos como la producción de naranjas, biocombustibles o agua; capítulos que analizan las políticas específicas en un país particular de América Latina; y, finalmente, capítulos que examinan las formas de resistencia y alternativas presentadas por los movimientos campesinos. En comparación a los dos libros mencionados previamente, los contribuidores de *Campesinos e agrocegócio na América Latina* comparten un enfoque de economía política ecléctica, parcialmente de la teoría marxista, y más explícitamente de conceptos neoliberales para su análisis. Ellos también sostienen el discurso de política neoliberal dominante de las agroindustrias a un escrutinio serio a través de contrastarlo con la verdadera situación de la marginalización de los productores campesinos. Adicionalmente, para explicar la naturaleza de la lucha actual entre los campesinos y las agroindustrias, la mayoría de los autores destacan la importancia de la especificidad social de las familias campesinas de ser productores de alimentos que dependen mayormente de la labor familiar, y de cómo estén situados en territorios específicos. Este libro será más satisfactorio para los lectores con mayor inclinación teórica.

*Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento* recopila varios de los artículos de Raúl Zibechi sobre algunos de los movimientos sociales más importantes de América Latina de las últimas dos décadas. De una manera un tanto impresionista pero original, el libro analiza los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador, el movimiento Sin Tierra en Brasil, el movimiento Zapatista en Chiapas, el movimiento Piquetero y las fábricas ocupadas en Argentina, la gente Mapuche de Chile, el conflicto armado Colombiano, el movimiento de los habitantes urbanos en Uruguay y el ascenso de los gobiernos progresivos en la región. El criterio para el éxito del libro de Zibechi, más que el impacto político, es el modo de ejemplificar la habilidad de los movimientos de mantenerse autónomos y organizar una alternativa desde abajo. Zibechi ve tres trayectorias en la relación entre los movimientos y los gobiernos: (1) situaciones en que los movimientos se mantienen fuertes porque están confrontado gobiernos neo liberales de derecha (Chiapas, Chile y Colombia); (2) situaciones en que los movimientos están volviéndose más fragmentados porque están confrontando gobiernos de izquierda que están aplicando versiones ligeras de neoliberalismo (Brasil y Ecuador); y (3) situaciones en que los movimientos han sido capaces de influir en gobiernos de izquierda debido a su relación orgánica con el partido político gobernante (Bolivia). El análisis de Zibechi presenta una diversidad de enfoques teóricos, tanto de Marx, Scott, Guha y Foucault, además de académicos latinoamericanos reconocidos que han aportado desde la perspectiva de la “colonialidad del poder”, tales como Aníbal Quijano, Edgardo Lander y Silvia Rivera. En este sentido, el trabajo de Zibechi resulta interesante y perspicaz, pero a la vez un tanto problemático ya que sus ideas y conceptos, aunque metodológicamente son muy originales e incisivos, no son suficientemente desarrollados y teorizados. Sus ideas se estancan al nivel de interpretación más

que demostración. Este libro, a pesar de sus limitaciones, debería ser tomado seriamente porque es una buena representación del “giro autónomo<sup>1</sup>” en el análisis de los movimientos sociales en América Latina.

### “Campesinismo”: tierra, agricultura familiar de pequeña escala, agroindustrias y territorio

El primer gran tema que destaca de la investigación de los movimientos sociales de América Latina es que la gran mayoría de los académicos ven a los campesinos como una clase que, independientemente de su heterogeneidad, ha logrado un nivel de conciencia política significativa a partir de su relación peculiar con la tierra, la agricultura y el territorio. Anette Demarais, por ejemplo, en su escrito sobre la *Vía Campesina* en *Rural Social Movements in Latin America*, destaca —a través del uso de los testimonios recogidos durante el trabajo de campo— la creciente unidad transnacional facilitada por la emergencia de un tipo de ideología campesina que gira alrededor de la relación tierra, lugar y territorio, el principio de la soberanía alimentaria, el intercambio de las experiencias agrícolas, y las luchas entre agricultores pequeños. Su capítulo sugiere que más allá que la importancia de las diferencias entre los productores familiares del Sur y del Norte, los campesinos buscan terreno común en la politizada “identidad ligada al lugar”. Debido a esto, ellos consideran que tienen el derecho de permanecer en la tierra y la obligación de producir alimentos (p. 46-7). En la misma línea, Bernardo Mançano Fernandes y Cliff Welch, en sus capítulos sobre el control de la producción de naranjas de las agroindustrias en los EEUU y Brasil en *Campesinato e agronegócio no América Latina*, rastrean como ambos países, en momentos distintos, productores de pequeña escala fueron gradualmente desplazados por las compañías de procesamiento. Fernandes y Welch y otros colaboradores en el libro, como Pilar Lazárraga y Carlos Vicaflares, también reconocen la diferencia de la producción campesina como una forma de vivir, enfatizando la importancia del auto-consumo, la labor familiar no remunerada, las relaciones no capitalistas y las perspectivas comunitarias. Irónicamente, Fernandes y Welch muestran como este “campesinismo” también fue instrumentalizado en el caso de la producción del jugo de naranja en Florida. Aquí, la agroindustria usó características de la producción campesina para presentar el jugo de naranja como un producto hecho por los

1 El término “autonomía” dentro de los movimientos campesinos y la erudición rural en América Latina se remonta a la década de 1980 y se refiere a la demanda y lucha por la independencia política del Estado y los partidos políticos. El concepto también abarca las diferentes estrategias de los movimientos campesinos enfocados en ganar más control sobre las distintas etapas de la producción agrícola. El actual “giro autónomo” tiene un origen distinto, pero converge en algunos elementos. Se refiere tanto a un tipo de interpretación de la naturaleza de los movimientos sociales en América Latina como a la estrategia política que encuadra el dilema entre la reforma y la revolución por el rechazo del poder estatal como el mecanismo principal para el cambio social radical. Autonomistas han llamado para reemplazar el centralismo estatal con el enfoque en la transformación de las relaciones de poder dentro de la sociedad civil y en la vida diaria de los miembros de los movimientos sociales (ver Álvarez y Escobar 1992; Zibechi 1999; Holway 2002).

pequeños productores de familias en sus campañas de publicidad (p. 57). Sin embargo, los agricultores o campesinos pueden haber tenido un lugar en las campañas publicitarias de la agroindustria, pero sólo pueden integrarse a las cadenas de alimentos agroindustriales en una posición subordinada.

El análisis de cómo la agroindustria controla la agricultura se ha convertido en uno de los puntos focales de algunos de las mejores investigaciones sobre los movimientos rurales, y los movimientos en sí han contribuido a atraer la atención de los académicos y las activistas en las agroindustrias. En el quinto capítulo de *Rural Social Movements in Latin America*, los representantes de MST de Brasil, Daniel Correa y Andréia Borges Ferreira, señalan cinco batallas importantes en la lucha campesina en contra de la agroindustria. Primero, la batalla sobre el control de la naturaleza en su conjunto, donde la agenda de las organizaciones campesinas debería ser de proteger los recursos y la promoción de los derechos de la alimentación sana. La segunda trata del acceso a la tierra para los agricultores familiares pequeños para que puedan apoyar la vida y el interés de la sociedad en general, en vez de las ganancias. El tercer punto focal gira en torno al principio de la soberanía alimentaria, en el cual se pone de relieve el derecho de la gente a defender su propia política alimentaria y el derecho de los pequeños agricultores a vender sus productos a precios justos, y también del consumidor de decidir qué quiere comer. La cuarta batalla es la de las semillas. Se opone el derecho y obligación de los campesinos de producir sus propias semillas al control e imposición de los organismos genéticamente modificados (OMG) de las corporaciones multinacionales. La batalla final es por las redes de producción y comercialización que serían controlados por las familias agrícolas pequeñas, en la cual la motivación de ganancias serían reemplazados por las necesidades de la gente y la diferencia cultural (p. 119-120).

Sobre el libro *Campesinato e agronegócio na América Latina* que aborda el poder creciente de la agroindustria más directamente, el capítulo de Horacio Mackinlay sobre México expresa vívidamente el alcance multifacético de la agroindustria sobre agricultura. Después de rastrear cómo el sector privado nacional de agricultura se reorganizó y estableció vínculos con las corporaciones de agroindustria en los EEUU que influyen en el proceso de negociaciones del Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte (TLCAN), Mackinlay esboza el estado del control del mercado por las grandes empresas familiares y corporaciones multinacionales de varios cultivos (maíz, cebada, frutas y verduras, tabaco, etc.) y llega a la conclusión que la agroindustria no ha adoptado una estrategia particular. Aunque sí ha sido capaz de modificar el ambiente institucional claramente (notablemente los derechos de propiedad y las regulaciones de comercio) a su favor, la agroindustria no ha tomado el control completo de la tierra y la producción. Dependiendo de los requisitos de cada cultivo, la agroindustria decidirá el tipo de acuerdo que tendría que establecer con los pequeños productores, que van desde alquilar la tierra para la producción directa a contratar la agricultura, facilitando el crédito a los pequeños productores para la producción, a simplemente comprar la producción en el mercado abierto. La tendencia general, sin em-



bargo, es que la agroindustria establece las reglas y los campesinos las aceptan con muy poca libertad. Las razones para esta situación son múltiples, pero las respuestas propuestas por los distintos autores pueden ser agrupadas en tres: la distinta naturaleza de la producción agroindustrial dentro del neoliberalismo de América Latina; el rol de las políticas estatales en promocionar la agroindustria; y el discurso dominante en la eficiencia de la agroindustria, que es adversa a los productores de pequeña escala.

El capítulo de Norma Giarracca y Miguel Teubal sobre la agricultura argentina en *Campesinato e agronegócio no América Latina* también presenta un excelente resumen del rol que la agricultura y los productores familiares juegan en el modelo de desarrollo de ISI y describen cómo estos han cambiado fundamentalmente con el neoliberalismo. Ellos muestran que la dictadura militar fue clave en esta transición porque destruyó las bases sociales del modelo ISI, aplastando a la vez el poder de negociación de los obreros asalariados y de los productores agrícolas familiares (p. 148-50). Además, ellos argumentan que el conflicto intra-clase en la cima, que culminó en la década de 1990 durante la presidencia de Carlos Menem, también modificó las condiciones de la producción agrícola y forzó a los terratenientes tradicionales a subordinarse a la agroindustria y el sector financiero. Según Giarracca y Teubal, la agroindustria ahora ha expandido su control sobre la agricultura argentina a través de la adopción de una serie de estrategias, tales como la provisión de insumos y paquetes de tecnología, compra de tierras, agricultura bajo contrato, y el control sobre la comercialización y procesamiento. No obstante, esto no parece ocurrir en México, y Brasil, donde las múltiples formas de subordinación de las familias agrícolas adoptadas por las agroindustrias parecen caer dentro de una tendencia general, ejemplificado por la producción de soya en lo cual las grandes empresas agrícolas integran el sector financiero y se especializan en la producción de “*commodities*” para exportar, a la vez que adoptan estrategias que privilegian la economía de escala que, consecuentemente, eliminan o marginalizan los pequeños productores familiares (p. 154-5).

La adopción del neoliberalismo por los Estados de América Latina desde 1980 y el surgimiento de la agroindustria han llevado a muchos académicos a encontrar maneras de intentar alejarse de una defensa romántica de los campesinos y dar paso al modelo de desarrollo de campesinos de pequeña escala. En los libros revisados, el capítulo de Peter Rosset en *Rural Social Movements in Latin America* aborda esta tarea, demostrando que la pequeña agricultura familiar puede ser más productiva y tener mayor impacto sobre el desarrollo socio-económico que la agricultura industrial de gran escala, además protegiendo el medio ambiente. Del mismo modo, el capítulo de Miguel Altieri en ¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas? demuestra con gran cantidad de evidencia, mayormente relacionado a la sustentabilidad ambiental y la diversidad bio-ecológica, las ventajas de la agricultura de pequeña escala y agro-ecológica. Aunque el debate entre la agricultura de pequeña o gran escala está muy lejos de concluir, los académicos tienden a aceptar que la promoción de la agricultura de pequeña escala pueda, por lo menos, tener un efecto relativamente positivo

sobre la mitigación de la pobreza rural, dado un compromiso de apoyo de parte del Estado. El problema más contencioso tiene que ver con que si la agricultura de pequeña escala es suficientemente productiva y competitiva, debajo del régimen alimentario global actual dominado por la agroindustria, para ser la base para la agricultura moderna. Considerando la escala de los subsidios y la producción que reciben los grandes agricultores, este último debate sigue planteando la cuestión de la función del Estado. La cuestión más importante es porque los Estados no han decidido apoyar la producción campesina. Una breve (si bien simplista) respuesta sería la presión sobre los países en desarrollo de las instituciones financieras internacionales a expandir la producción de los cultivos para la exportación a gran escala, y donde la agroindustria presenta muchas condiciones para lograr dicho requerimiento.

Activistas y académicos que observan este elevado control de las agroindustrias sobre la agricultura, a pesar de las ventajas importantes de la pequeña producción familiar, se ha convertido de forma natural al rol de las decisiones y políticas del Estado. La gran mayoría de los académicos en los cuatro libros revisados identifican el impacto de la desregulación y la liberalización de la agricultura en los 80 y 90 como un momento crucial. También hay un claro consenso sobre las consecuencias negativas de estas políticas sobre las familias campesinas y los pequeños productores familiares. Hay una diferencia, no obstante, entre los académicos de influencia marxista y los representantes de movimientos sociales, por un lado, y los académicos con otras influencias teóricas por otro. En *Campesinato e agronegócio na América Latina* y en *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?*, los autores presentan el cambio en las políticas estatales como decisiones políticas intencionales determinadas por grupos específicos que controlaron el Estado a fin de fomentar sus intereses clasistas. En *Rural Social Movements in Latin America*, la mayoría de los académicos no cuestionan las razones para el cambio en el modelo de la política agraria y parecen tomarlas como dadas. La diferencia en perspectiva y explicación se da entre los representantes de los movimientos sociales, quienes presentan sus luchas, demandas y propuestas claramente en términos de clase; y los académicos, quienes frecuentemente se limitan a reportar sobre las luchas y sacan conclusiones limitadas de clase.

Sin embargo muchos académicos proponen políticas alternativas, que sean centradas en el Estado y en la sociedad civil con intención de beneficiar a los pequeños productores. Las propuestas de política presentados por los movimientos campesinos son bastante directas: revertir las reformas neoliberales, bloquear la expansión de la agroindustria y las corporaciones multinacionales, y desarrollar un nuevo modelo de agricultura basado en el apoyo estatal para promocionar a los pequeños productores familiares (ver el capítulo de Rosset, Tiney y Saisari en *Rural Social Movements in Latin America*). Otras propuestas de menor intensidad, siguiendo la agenda de buena gobernanza del post-Consenso de Washington, simplemente argumentan a favor de la participación de las comunidades rurales en la elaboración, implementación y monitoreo de las políticas específicas. Esto no es sin contradicciones. El capítulo de Mary Allegretti y Marianne Schminck en *Rural Social Movements in Latin America*

sobre el rol del movimiento de los caucheros de la Amazonía de Brasil en el desarrollo del programa estatal nacional de la planificación del uso de tierra y los servicios ambientales, llamado *Proambiente*, es excelente para mostrar las contradicciones detrás de la adopción de la propuesta de políticas de movimientos sociales por el Estado. Los autores muestran como la lucha específica de los caucheros y su decisión de discurso y alianzas llevó a la aparición de una propuesta de crear un fondo de reserva extractiva sustentable que combinaba la planificación participativa del uso de la tierra, preservación y desarrollo de las técnicas agro-ecológicas y la compensación financiera a los campesinos por los servicios ambientales del Estado. Ellas también examinan las contradicciones que emergen cuando la propuesta de un contexto específico fue cambiada a una política estatal gracias a la fuerza política del movimiento social. Como han mostrado otras investigaciones comparando varias experiencias del manejo comunitario de los recursos naturales por todo el mundo en desarrollo (Dressler et al. 2010), la conclusión de Allegretti y Schmink es que la adopción por el Estado de una política alternativa que emana de un movimiento social localizado y su subsiguiente “trasplante” a las diferentes regiones y contextos pueda conducir a una política de arriba hacia abajo más o menos vacía. Este método de subir y ampliar la iniciativa de los caucheros no generó el dinamismo político que el movimiento desencadenó en primera instancia, y que habría sido necesario en otra parte la política de reserva para satisfacer realmente sus objetivos. Considerando el hecho de que los movimientos sociales en Brasil no han tenido el poder e influencia sobre el Partido Obrero y el gobierno como otros movimientos rurales tienen sobre su partido de alianza y el gobierno, en lugares como Bolivia por ejemplo, el problema en realidad se trata del poder de los diferentes actores y las decisiones tomadas por los políticos de izquierda. En la misma línea con la mayoría de los contribuidores de *Rural Social Movements in Latin America*, el problema del poder de clases y su rol en las políticas de partidos emergen aquí, pero los autores lo no hacen suficiente frente.

Cada vez más, influido por la creciente importancia que el análisis de discurso ha adquirido en las ciencias sociales, para poder atajar la naturaleza contradictoria (y frecuentemente inapropiada) de las políticas estatales, muchos académicos rurales están dirigiendo su atención hacia la manera en que estas políticas han sido presentadas y justificadas. En *Campesinato e agronegocio no América Latina* examinan el discurso estatal y desafían los supuestos sobre el cual se basan las políticas agrícolas y los programas rurales. En el capítulo de Pilar Lizárraga y Carlos Vicaflares sobre las visiones competitivas de desarrollo rural en Tarija, Bolivia, analizan el contenido del discurso estatal detrás del programa local para estimular los negocios rurales. Usando los conceptos de hegemonía y el sentido común de Gramsci, Lizárraga y Vicaflares argumentan que la crisis del Estado a nivel nacional facilitó la ruptura en la hegemonía neoliberal que permitió a las organizaciones campesinas cuestionar las ideas dominantes, racistas y coloniales de desarrollo rural que celebran el empresario moderno (blanco) y quienes desacreditan a los campesinos (indígenas) como atrasados e ineficientes (p. 228-9). En Tarija, sin embargo, el bloque en el poder no fue

desplazado y las perspectivas neo-colonial neoliberal de desarrollo rural permanecieron en los programas que profesan generar el desarrollo económico. Los autores argumentan, no obstante, que el programa representa un proyecto de clase claro porque está fundado en términos individualistas y atomísticos, en forma contraria a cómo los campesinos conciben y se apropian del territorio. El espacio en el programa estatal es concebido como un “espacio vacío” y la proyección de lo local es hacia lo global; por eso existe el fomento de la ganadería extensiva. En contraste, las organizaciones campesinas conciben el espacio local en términos del acceso directo a los recursos (tierra, agua y biodiversidad) para el fin de subsistencia y el privilegio de la comunidad y el mercado local (p. 236-7). En el mismo libro, el capítulo de Jorge Montenegro Gómez habla sobre la visión de desarrollo rural promovido por la organización inter-americana inter-nacional, llegando a la misma conclusión. Examina cómo las instituciones han incorporado el concepto de capital social y la idea de participación en el modelo neoliberal de desarrollo. Montenegro Gómez argumenta que estas instituciones reproducen una concepción “plana” del espacio, conceptualizándolo como armoniosa, sin actores antagónicos y conflictos de intereses (p. 266-7). El discurso de participación representa, según Montenegro Gómez, una nueva forma de control social orientado a desmovilizar y desintegrar los movimientos sociales, dado que representan una amenaza a las reglas de la burocracia estatal y los imperativos financieros de los fondos del Estado (p. 265).

La investigación más prometedora sobre la agricultura campesina y los movimientos campesinos toma el espacio y el territorio en serio. Aparte del trabajo del geógrafo brasileño Bernardo Mançano Fernandes (2005), Raúl Zibechi es uno de los autores quien ha subrayado consistentemente la importancia del control territorial para la emergencia y consolidación de una alternativa al neoliberalismo. Según él, hay siete características de los movimientos sociales anti-neoliberales en América Latina y los hacen únicamente alternativas (p. 21-7)<sup>2</sup>. El primero y más importante son los movimientos que han logrado territorializarse en un espacio físico específico y organizarse alrededor de las comunidades que conforman espacios de auto-gobernanza. Segundo, la autonomía de los movimientos de los partidos políticos y el Estado se basa en su habilidad de asegurar recursos para la subsistencia material de sus miembros. Tercero, la revalorización de la cultura y la identidad han sido centrales para consolidar la movilización de los movimientos. Cuarto, los movimientos han desarrollado la habilidad de formar sus propios intelectuales orgánicos. Quinto, el nuevo rol de las mujeres ha transformado los papeles de género tradicionales al interior de las comunidades y los movimientos. La sexta característica es que los movimientos se han preocupado particularmente con la organización del trabajo (buscando formas de trabajo no alienado y probando el trabajo colectivo de distintas formas) y su relación con la naturaleza. Finalmente, las formas de movilización han sido marcadas por

2 Estos son el movimiento Zapatista en Chiapas, el movimiento Sin-Tierras en Brasil, el movimiento Piquetero y las fábricas ocupadas en Argentina, y los movimientos campesinos indígenas en Bolivia y Ecuador.

la “auto-afirmación”, según Zibechi, de un tipo de subjetividad basado en la experiencia, en lugar de categorías doctrinarias tradicionales dominantes en la izquierda. Según Zibechi, la creación de los movimientos de la “nueva territorialidad” es la característica más importante, porque es donde los miembros de los movimientos toman el control de sus vidas diarias y sobre la cual todas las otras características se materializan. Esto es también posible porque las formas de organización política que los movimientos han adoptados son basadas en una reconfiguración de la unidad de familia extendida que “crea un nuevo espacio doméstico que no es privado ni público, pero algo nuevo que encapsula los dos” (p. 47). Zibechi observa que los movimientos están empezando a convertir estos espacios en alternativas para el sistema dominante, porque ellos están en espacios de subsistencia y acción política, y también porque construyen relaciones no capitalistas sobre ellos (p. 48).

Mi propia investigación, sobre experiencias alternativas de desarrollo emergiendo de la lucha por la tierra del movimiento Zapatista en Chiapas y el MST en Brasil (Vegara-Camus 2009, 2011), apunta a conclusiones muy similares a las de Zibechi. Desde la perspectiva de los autores quienes enfatizan la naturaleza no capitalista de *algunos aspectos* de la producción campesina, por lo menos dos temas necesitan ser investigados y no asumidos: la naturaleza de las relaciones sociales de producción y las potencias y limitaciones de las relaciones no capitalistas de producción como un escalón a construir una alternativa al neoliberalismo. Algunos autores, como varios contribuidores al libro *Campesinato e agronegocio na América Latina*, argumentan que los elementos no capitalistas de la producción campesina, sin importar su integración a las relaciones capitalistas, es una fuente de resistencia al capitalismo y, dependiendo de las acciones de los movimientos campesinos mismos, *pueden ser* (pero no son necesarios) la base para un modelo de desarrollo alternativo. La mayoría también reconocería que la naturaleza no capitalista de la producción campesina *no es absoluta* y donde también surgen muchas contradicciones, especialmente cuando uno intenta construir relaciones alternativas de producción o distribución al interior del mercado capitalista. En este contexto, cuestiones de estrategias de resistencia y de redes de comercialización alternativas no son tan fácilmente contestadas y no hay una respuesta mágica a este tema. Los libros revisados estudian varias opciones tales como la creación de grupos corporativistas de presión (Fernandes y Welch en *Campesinato e agronegocio na América Latina*), redes de comercio justo (Conroy en *Rural Social Movements in Latin America*), mercados de granjeros locales (García Guerreiro en *Campesinato e agronegocio na América Latina*), ecoturismo (Solís Librado en *Rural Social Movements in Latin America*) y la provisión de servicios ambientales (Allegretti y Schmink en *Rural Social Movements in Latin America*), entre otros. Sin embargo, considerando la diferencia de la producción campesina y la importancia de la tierra en la movilización campesina y la identidad política, la reforma agraria y la protección del acceso de los campesinos a la tierra son otra vez un tema central en la discusión sobre modelos alternativos de desarrollo rural en América Latina.

## Reforma agraria, propiedad, Estado y desarrollo alternativo

Adicionalmente al capítulo previamente mencionado de Peter Rosset en *Rural Social Movements in Latin America*, varios académicos que han contribuido en la elaboración de los textos revisados asumen el rol de evaluar las reformas agrarias actuales en América Latina con motivo a enfocarse en los modelos teóricos que los han inspirado. La conclusión general es que, con la posible excepción de Bolivia y Venezuela, ninguna ley de reforma agraria en la región puede actuar como un modelo alternativo de desarrollo rural porque la mayoría de las políticas rurales son guiadas por un sesgo conceptual pro-mercado neoliberal (ver los capítulos de Milfred López, Jorge Montenegro Gómez, y Sergio Pereira Leite y Rodrigo Viera de Avila en *Campesinato e agronegócio no América Latina*). En el caso de Bolivia, el capítulo de Miguel Urioste en *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?* Destaca que la ley de reforma agraria de Evo Morales representa una mezcla de los logros históricos y retrocesos (p. 140-1). Aquí el Estado recuperó alguna capacidad de reclamar tierra a través de auditorías que pueden determinar si una propiedad realiza su función socio-económico. La ley también estipula que la tierra debería ser destinada a los campesinos sin tierra. Sin embargo, otras partes de la ley indican que en los casos de expropiación, los terratenientes serían compensados con los precios de mercado, y lo más importante es que el límite legal a la tenencia de la tierra está ahora fijado en 5 000 hectáreas. Una concesión adicional importante a los grandes terratenientes es que las propiedades más grandes que 5 000 hectáreas registradas *antes* que la ley no son sujetos a este límite (Cunha y Goncalves 2010, 188). Esto, combinado con el hecho de que las auditorías han probado ser una manera ineficiente de recuperar la tierra en el pasado, indica que la reforma agraria verdadera sería difícil de llevarse a cabo en Bolivia.

Según el gobierno, 23,46 millones de hectáreas tendrían que ser distribuidas a aproximadamente 100 000 familias (Cunha y Goncalves 2010, 188). No obstante, otra contradicción evidente es cuando consideramos el tipo de tierra que ha sido distribuida. Como en muchos otros países Latinoamericanos en el pasado, el Estado boliviano ha usado la tierra pública para distribuir cerca de la mitad (9 millones hectáreas) a las comunidades indígenas en las tierras bajas de la Amazonia. Esto, sin embargo, es conflictivo con las expectativas de los migrantes indígenas de las tierras altas andinas, quienes ahora ven la oportunidad de acceder a la tierra. La única posible opción para los campesinos indígenas del oeste se basa en el proceso de criticar la legitimidad de los títulos de propiedad de los grandes terratenientes, donde el gobierno de Evo Morales ha hecho poco progreso (p. 146). Algunos dirían que las condiciones políticas no fueron listas para una reforma agraria radical.

Resulta interesante que en la mayoría de las investigaciones sobre la reforma agraria, si los capítulos fueron escritos por los representantes de los movimientos rurales o los académicos, las cláusulas constitucionales que atribuyen una función social a la propiedad se resaltan como mecanismos particularmente importantes para la posible creación de una al-



ternativa al neoliberalismo. Sin embargo, asombrosamente, pocos investigadores se enfocan en estas cláusulas constitucionales como su sujeto principal de estudio. La función social del estudio fue, por ejemplo, instrumental en el éxito de la movilización y distribución de la tierra en Brasil, o se volvió una manera de institucionalizar las demandas de los campesinos para las tierras en los países como Bolivia y Ecuador. Varios autores también mencionan que la función social de la propiedad, en combinación con otros principios como la soberanía alimentaria o *sumak kawsay* (*buen vivir en español*), consagrados en la constitución nacional podrían ser el instrumento para habilitar el cambio social y posiblemente formar la base de las políticas pos-neoliberales. La nueva constitución de Bolivia incorpora el principio de la soberanía alimentaria para asuntos de políticas agrícolas y de la función social de la propiedad para temas relacionados con el acceso a recursos. En Ecuador, bajo el mandato del presidente Correa, la constitución también incorpora nociones de la soberanía alimentaria y de *sumak kawsay* para temas socio-económicos en general, como los principios rectores del modelo de desarrollo e intervención del Estado (ver los capítulos de Juan Pablo Muñoz en *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?*, p. 158-64).<sup>3</sup> Según Muñoz, esta incorporación sugiere el principio de la era pos-neoliberal, porque la idea de *buen vivir* implica “desarrollo equitativo y sustentable” basado en “la solidaridad en vez de la competencia, equidad en vez de disparidad social, y protección ambiental en vez de su destrucción” (p. 160-1). En términos de las políticas agrícolas, la adopción del enfoque de la soberanía alimentaria en la constitución sugiere un mejoramiento en comparación con el concepto de la seguridad alimentaria, porque proclama buscar la autosuficiencia alimentaria al privilegiar los pequeños productores sustentables. Muñoz sigue siendo escéptico, no obstante, porque los principios constitucionales no fueron acompañados con un compromiso que garantiza los derechos y acceso a la tierra, el agua y la protección de la biodiversidad, los cuales son fundamentales para la consolidación de un modelo alternativo de desarrollo. A pesar de que él parece estar suspendiendo su juicio sobre el gobierno de Correa, Muñoz ve estos desarrollos recientes como indicativos de una decisión clara de una redistribución de la riqueza parcial de parte del Estado y estableciendo vínculos autoritarios y clientelistas a los movimientos social que se están debilitando (p. 156-7). El capítulo concluyente de Jordi Gascón en *¿Cambio de rumbo de las políticas agrarias latinoamericanas?* también apunta a varias contradicciones en las políticas actuales de Ecuador, tales como la inclusión de ciertas enmiendas que permiten la importación de transgénicos, la legalización de la ocupación de los manglares por las empresas camaroneras, y la posibilidad de la producción de biocombustibles con los cultivos alimentarios (p. 242).

3 Porque es muy reciente, la adopción de *sumak kawsay* o *buen vivir* es uno de los principios rectores de su modelo de desarrollo para algunos gobiernos latinoamericanos que no ha sido analizado académicamente y su aplicación aún no se ha visto. Para discusiones preliminares pero interesantes, ver Esteva (2010), Walch (2010), Becker (2011), Gudynas (2011), Thomson (2011), Arsel (2012) y Arsel y Avila Angel (2012).

Ecuador no es el único caso donde los movimientos sociales rurales han hecho progresos en un frente –por ejemplo, el reconocimiento constitucional de ciertos privilegios y derechos – pero han fallado en forzar a los gobiernos en transformar las políticas agrarias significativamente. Jeffrey Webber ha desestimado el progreso de la Asamblea Constitucional y las reformas constitucionales en Bolivia, dado que las políticas actuales del gobierno de Evo Morales representan un turno hacia el neoliberalismo reconstituido (2012, 169). Es verdad que las políticas de Evo Morales no han intentado cambiar el enfoque de la agricultura boliviana de la producción comercial de gran escala hacia metas de autosuficiencia basado en la agricultura de pequeña escala. Con la excepción de Cuba, debido a sus circunstancias altamente extraordinarias, esto no ha sido el caso de ningún país latinoamericano hasta ahora. ¿Eso quiere decir que los gobiernos de izquierda no se alejan del neoliberalismo o que los actuales logros limitados no pueden convertirse en trampolín para los movimientos sociales rurales para impulsar el abandono del neoliberalismo?

Mark Becker (2011) ha mostrado qué tan dinámica y compleja es la batalla para incluir concepciones indígenas y derechos en la constitución de Ecuador. Argumentó que no deberíamos, subestimar el significado de tal propósito. Aunque las leyes claves, como la ley minera, han mantenido su carácter neoliberal, la habilidad del Estado de intervenir ha incrementado. Los autores analizan la creación de la iniciativa Yasuní-ITT del gobierno de Correa, que propone dejar las reservas de petróleo sin explotar a cambio de las compensaciones financieras de la comunidad internacional, y combina el despliegue de la noción indígena de la *Pacha Mama* (madre tierra) con la mercantilización neoliberal, lo cual ha suscitado la preocupación sobre el carácter contradictoria de las políticas de Correa, además de su estatismo (Arsel 2012, 154; Arsel y Avila Ángel 2012, 220-3). Queda claro que el reconocimiento constitucional del principio de la soberanía alimentaria o *buen vivir* no es en sí suficiente. Pero como la historia reciente de los movimientos sociales rurales atestigua, las leyes y las cláusulas constitucionales han sido usadas exitosamente por los movimientos rurales para forzar cambios en la política. Los avances futuros dependerán de la habilidad de los movimientos rurales de afectar el balance de las fuerzas de clase dentro de la sociedad y el Estado.

## Campesinos, políticas, Estado, cambio social y autonomía

En su libro clásico *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Barrington Moore (1966) concluyó que las revueltas campesinas fueron raramente favorables para los campesinos. Afirmó: “los campesinos han provisto la dinamita para derribar el edificio antiguo. Para el trabajo subsiguiente de la reconstrucción, no han traído nada; sino que han sido – hasta en Francia – sus primeras víctimas” (Moore 1966: 480). ¿Podríamos decir lo mismo sobre los movimientos campesinos de América Latina hoy en día? La literatura examinada para esta revisión no es unánime, pero la mayoría de los autores no estarían de acuerdo con Barring-



ton Moore, porque muchos movimientos por toda América Latina han pasado de la protesta a la propuesta. La cuestión de que si han tenido un impacto verdadero sobre las políticas y si éstas terminan siendo beneficiosas, presentan múltiples respuestas. Por un lado, sorprendentemente, los activistas de los movimientos sociales están muy lejos de ser complacientes hacia los gobiernos progresivos que ellos han ayudado a elegir. La mayoría de ellos reconocen la importancia de lograr un alto nivel de unidad dentro del movimiento para poder movilizar exitosamente y forzar al gobierno a tomar ciertas decisiones o adoptar ciertas políticas. Los capítulos escritos por los líderes de los movimientos sociales en *Rural Social Movements in Latin America* muestran el nivel de autonomía de los partidos políticos y el Estado que los movimientos rurales han podido lograr, pero también cómo han sido capaces de formar coaliciones con los partidos políticos para confrontar o acceder al poder estatal.

El capítulo escrito por George Ann Potter y Leonida Zurita, el ex secretario ejecutivo del Coordinador de las Mujeres Campesinas de los Trópicos (COCAMTROP) de Bolivia y actual senador alternativo para el Movimiento Hacia el Socialismo (MAS), ejemplifica cómo incluso los movimientos que han sido incorporados en el partido de gobierno y el Estado no les han dado un cheque en blanco. Potter y Zurita orgullosamente subrayan, por ejemplo, que el incremento en el número de candidatas femeninas para el MAS fue un resultado de la presión del movimiento de mujeres dentro del partido. Las mujeres lograron 35 por ciento de las delegadas elegidas a la asamblea constitucional en 2007 y forman 48 por ciento de las delegadas del MAS, también la nominación de varias mujeres indígenas campesinas a posiciones ministeriales importantes son vistos como victorias que todavía necesitan ser transformados en plataformas para la organización de mujeres sobre “temas de mujeres” (p. 242). Del mismo modo, según Saisari Silvestre, el coordinador nacional del Movimiento indígena, campesino, y de trabajadores sin tierra de Bolivia (MST-Bolivia), la ley de reforma agraria de Evo Morales, aunque no es perfecta, es importante porque se está expandiendo “las provisiones para la tierra para revertir al Estado si la tierra no es usada para un fin socio-económico”, y porque permite a los movimientos sociales rurales iniciar y participar en el proceso de auditorías de las propiedades (p. 134). El análisis de Peter Rosset sobre los límites de la reforma agraria de Evo Morales hace eco de los movimientos sociales para recordarnos que el Estado boliviano ha sido tradicionalmente débil en confrontar a las terratenientes grandes. Adicionalmente, Evo Morales está situado en una posición incómoda porque una parte importante de los latifundios bolivianos están en las manos del capital brasileño y por ende, irónicamente, defendidos por el Estado brasileiro (entrevista en *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?* p. 202). Según él, incluso si el campesino boliviano y el movimiento social han sido capaces de movilizar una gran cantidad de gente, no tienen la capacidad de ocupar la tierra, como en el caso del MST de Brasil. En estas circunstancias, con el fin de evitar sucesiones regionales o un *coup d'état*, Evo Morales necesita ser muy cauteloso. Los movimientos rurales por toda la región entienden que las políticas, incluso las de los gobiernos aliados, son el resultado de la balanza de

poder en un punto determinado en el tiempo, y por ende han sido movilizado no sólo para mostrar su apoyo sino también para presionar a sus respectivos gobiernos a llevar a cabo la reforma agraria o implementar las políticas agrícolas favorables. Esto también ha sido una estrategia desde hace mucho tiempo del MST en Brasil, incluso en lugares donde el Partido del Trabajador (PT) gobernaba un Estado en particular o el gobierno federal. Como el capítulo de Miguel Carter sobre el MST de Brasil en *Rural Social Movements in Latin America* donde destaca correctamente que uno de los factores más importantes para explicar el éxito de la organización ha sido su habilidad de realizar una movilización masiva y combinarlo con una estrategia creativa que incluye manifestaciones de larga distancia, demostraciones en la calle y campos de protesta que pasan de la confrontación a la negociación. El MST, por ejemplo, continuaba usando la ocupación de los edificios públicos como una de sus tácticas claves para atraer la atención pública sobre la falta de apoyo para los pequeños terratenientes en un estado como el de Rio Grande do Sul, el cual era gobernado por el PT a través de los años a principios del 2000. Del mismo modo, durante la presidencia de Lula (2003-2011), el movimiento también organizó varias manifestaciones en Brasilia para presionar al presidente a acelerar la reforma agraria y la financiación focalizada hacia los productores campesinos familiares.

Lo que queda claro de la literatura revisada –aunque ningún texto en particular lo argumenta directamente, excepto el capítulo concluyente de Jordi Gascón en *¿Cambios de Rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?*– es que las especificaciones nacionales tienen importancia en la habilidad de los movimientos sociales para presionar a sus políticos exitosamente. El grado de autonomía (o falta de autonomía) que los políticos tienen respecto a las agroindustrias también es un factor para entender las políticas estatales y las acciones de los “gobiernos progresivos” – como atestigua el caso de la presidencia de Lula en detrimento de los movimientos rurales. El núcleo de la materia gira en torno a la naturaleza del poder estatal y las diferentes estrategias que los movimientos rurales han adoptado hacia ellas.

El problema delicado es la relación entre los movimientos sociales, los partidos políticos y los gobiernos de izquierda o progresivos que han sido sujeto de un acalorado debate al interior de la izquierda latinoamericana por varias décadas. Las Zapatistas, con su estrategia política innovadora de no “tomar” el poder del Estado para desarrollar experiencias de auto-gobernanza, dieron a este debate una nueva dimensión. La experiencia pragmática del MST en Brasil, la incorporación de los activistas de movimientos sociales en la gerencia de las políticas estatales en Ecuador y la integración de los líderes de movimientos sociales en el gobierno de Bolivia, bajo Evo Morales, han planteado numerosas cuestiones prácticas y teóricas. Para Fernando Mayorga, en *¿Cambios de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?*, la relación entre los movimientos sociales y el actual Estado en Bolivia no puede ser entendida usando conceptos de autonomía o cooptación. Lo que tenemos en frente de nosotros es una “coalición inestable” porque ciertos movimientos, tal como el de los cocaleros, son la base de apoyo orgánica y permanente del MAS. Otros, como algunos

sindicatos y cooperativas, se han aliado circunstancialmente con el gobierno, mientras otros grupos, particularmente el de la Central Obrero Boliviana, se han suscrito a la agenda del MAS pero han permanecido independientes y no han entrado en los círculos internos de poder. Finalmente, ciertas organizaciones como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ) han actuado alternativamente como grupos de aliados o interesados durante la Asamblea Constituyente. Mayorga, sin embargo, señala un proceso incipiente de institucionalización de la relación entre los movimientos y el Estado que empezó en 2007 y 2008, en el contexto de la Asamblea Constituyente con la firma del Pacto de Unidad por la mayoría de los campesinos y los movimientos indígenas y la creación de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM). El CONALCAM era crucial para la movilización de los sectores populares en contra de la oposición de la oligarquía regional del gobierno de Evo Morales durante el primer año de su mandato. Sin embargo, la relación entre los movimientos sociales y el Estado tiene contradicciones, porque a pesar de que hay un intercambio dinámico entre ellos, el presidente de turno parece estar cultivando una relación directa con los movimientos que no necesariamente atraviesa el gobierno o el CONALCAM (94-5). El espectro de clientelismo sale a la superficie aquí, pero según la literatura, en ningún lugar ha sido más agudo y devastador que para los movimientos sociales en Ecuador.

Una de las experiencias de los movimientos rurales que llamó la atención de los académicos era de hecho la experiencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), porque jugó un rol crucial (aunque controversial) en la lucha en contra del neoliberalismo y la caída de los gobiernos de la derecha. Un académico ecuatoriano, Victor Bretón, en *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?*, rastrea la alianza política de la CONAIE con el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005) y lo ve como la culminación de un proceso largo de neutralización del potencial rebelde del movimiento campesino indígena. Usando su conocimiento extensivo del campo Ecuatoriano, Bretón argumenta que la Reforma Agraria de 1960 y 1970, que fue en realidad un proceso de colonización de la nueva tierra, irónicamente desmovilizó al movimiento campesino y facilitó el surgimiento de una nueva élite indígena. Con la implementación del neoliberalismo, esta élite indígena empezó a enfatizar la etnicidad indígena como una herramienta movilizadora para la creación de un nuevo movimiento pan-indígena. Más tarde, una facción de esta élite jugó el rol de mediador entre el Estado y la población rural, a través de la creación de una plétora de ONG, vinculada a los programas de desarrollo financiados desde el extranjero. Esta facción del liderazgo indígena fue transformada en lo que Charles Hale (2004) ha llamado el 'indio permitido' y se hizo parte del aparato de poder del multiculturalismo neoliberal (69). Esto, según Bretón, llevó al 'sobre-etnicización' de los problemas del desarrollo rural que han terminado por ocultar los procesos de concentración de la tierra y la proletarianización lumpen de un grande sector de la fuerza laboral rural ecuatoriana.

Llegando a conclusiones similares, pero trabajando con la idea de gobernabilidad y bio-poder de Foucault, Raúl Zibechi sostiene que el peligro más importante para los movimientos

hoy es el estar hinchados por la lógica del Estado y las políticas institucionales, y el proceso de perder su autonomía. Según él, la experiencia de la CONAIE ejemplifica este peligro. Haber estado en primera línea de varios levantamientos y prácticas democráticas de base en la década de 1990, sus líderes –sin consultar a sus miembros– adoptaron una estrategia estatista (289) que contradujo la potencial alternativa del movimiento. En el otro extremo, la ruta tomado por los Zapatistas de Chiapas es, para Zibechi, la forma ‘más coherente y explícita’ de hacer políticas (145) en América Latina. Peter Rosset (entrevistado en *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?*) es más pragmático. Él cree que elegir los gobiernos de izquierda ha sido un paso importante, pero que los movimientos necesitan ser capaces de mantener su autonomía para adoptar una posición de ‘apoyo constructivo’ de las políticas apropiadas más que una crítica y presión cuando no están. Desde la perspectiva de los movimientos campesinos una de las condiciones fundamentales debería ser la garantía de compra a los productores campesinos en vez de la agroindustria (195). El debate sobre la relación entre los movimientos sociales y el Estado o sus estrategias hacia el poder estatal está muy lejos de tener un fin. Los tres autores citados representan la diversidad de opiniones sobre este asunto.

El caso de Ecuador es, sin embargo, muy distinto al de Bolivia, principalmente porque Correa, no tiene una trayectoria de activista en los movimientos sociales. Su relación con los movimientos sociales es por ende mucho más ambigua y su estilo de gobernanza es más remaneciente de los políticos populistas de América Latina. Juan Pablo Muñoz caracteriza el gobierno actual de Correa como un “gobierno en desarrollo con vocación social, rociado con una buena dosis de moralidad cristiana con una nueva forma de caudillismo, además de una retórica anti-imperialista y revolucionaria’ (157). No obstante, Correa respondió al movimiento campesino e indígena al llamar a una Asamblea Constituyente, y después consagrando el principio de la soberanía alimentaria en la Constitución ecuatoriana. Sin embargo, en oposición a esta, las leyes de minería de Correa siguen a las industrias extractivistas que frecuentemente invaden en los territorios indígenas. Los movimientos han reaccionado distintamente a la ambigua política de Correa. Esta vez, la CONAIE ha mantenido una distancia de cualquier alianza formal con Correa y ha criticado sus leyes de soberanía alimentaria por ser demasiado indulgentes con las semillas transgénicas. La CONAIE incluso ha reclamado su rol de liderazgo del pasado llamando con éxito a una movilización de masas en contra de estas medidas del gobierno de Correa el 22 de Marzo 2012. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negra (FENOCIN), no teniendo experiencia anterior de cooperación con el gobierno, ha decidido no oponerse a Correa, y algunos de sus líderes tomaron posiciones dentro del Estado porque vieron al gobierno progresivo como una oportunidad de lograr ciertas reformas (Entrevista con Rosset, 205)<sup>4</sup>.

Esto parece ser la regla general de la región. Movimientos rurales toman la decisión sobre si colaboran o no con los partidos políticos, y el Estado se basa en sus propias expe-

4 Desde la Asamblea Constituyente, la FENOCIN se ha alejado gradualmente del gobierno de Correa hasta que finalmente se rompió en el congreso nacional de Marzo, 2013.

riencias con ellos y rara vez en relación con motivos ideológicos. Lo que las experiencias recientes y los dilemas en Ecuador, Bolivia y Brasil en menor medida sugieren es que los movimientos rurales sociales parecen estar entrando en un nuevo y mucho más complejo ciclo de movilización: un ciclo que les coloca en oposición a los gobiernos y partidos aliados que no han implementado reformas necesarias para apoyar los productores campesinos, pero también un ciclo en el cual los líderes de los movimientos intentan empujar un cambio desde el Estado. Este nuevo ciclo está destinado a proporcionar más material para la acalorada discusión entre los autonomistas radicales y los académicos centrados en el Estado. Dependiendo del concepto de gobernabilidad de Foucault para desacreditar los intentos de los movimientos sociales de llevar a cabo el cambio social, como Zibechi ha dicho recientemente, no provee una vía fructífera para el análisis. Tiende a depender del Estado, para transformarlo en una estructura que impone una lógica específica sobre todos los agentes involucrados dentro del mismo. Al hacerlo, también postula estrategias anti-Estado como superiores a otras estrategias, en vez de verlos como los resultados de unos procesos particulares y decisiones internas de los movimientos sociales.

## Comentarios sobre la escolaridad de los movimientos rurales sociales en América Latina

En general, el estado de arte de la escolaridad de los movimientos agrarios parecen estar siguiendo el dinamismo de los movimientos agrarios, pero sus limitaciones son el reflejo de la naturaleza fragmentada del mundo académico. Debido a la importancia de los movimientos rural en las políticas latinoamericanas, una gran cantidad de investigaciones involucran enfoques multidisciplinarios y trabajos de campo intensivo. Esto tiene la ventaja de proveer descripciones muy detalladas de una gran variedad de casos. La desventaja es que en este caso era de sobre-especialización académica, la mayoría de la escolaridad está organizada alrededor de un solo caso de estudios que a menudo no entraban en debate o diálogo con los resultados de otros estudios de casos. La mayoría de la investigación simplemente intenta identificar las tendencias en vez de examinarlas a través de estudios comparativos que tengan el objetivo claro de explicar lo que tienen en común y las diferencias además de las trayectorias divergentes. Además, el uso de la teoría parece desigual. Solo una minoría de los investigadores está preocupada con aplicar un marco teórico abarcador y coherente para entender sus casos de estudio. La mayoría de la escolaridad revisada en esta reseña, con la excepción de Giarracca y Teubal, Horacio Mackinlay, Bernardo Mançano Fernandes y Cliff Welch, Jordi Gascón y Raúl Zibechi, adoptan una perspectiva que es demasiado enfocado en la actual coyuntura neoliberal, en vez de tomar una perspectiva histórica que podría interrogar el rol de la coyuntura global sobre los procesos nacionales de movilización. La mayoría de la escolaridad también mira a los movimientos sociales

más o menos en aislamiento de sus adversarios, sea los oficiales estatales, agro-negocios o los terratenientes tradicionales y sus aliados. Claramente, hay una brecha de investigación sobre los resultados dinámicos y las limitaciones de las políticas de conflicto y alianzas de los movimientos rurales sociales en relación con los otros actores.

Porque buscan insertar procesos específicos en las tendencias más grandes y entender los resultados políticos en términos de balanza del poder, los enfoques teóricos que se acercan a una perspectiva más holística son los que todavía adoptan un enfoque de economía política clasista para los movimientos rurales. Acercamientos de economía política históricamente informados, que entretengan los procesos globales y locales y consideran seriamente entenderlo como el resultado de una lucha entre las clases al nivel nacional. Todavía son los acercamientos que nos permiten entender los procesos rurales en todas sus complejidades. El reto para los académicos rurales es proporcionar una explicación detallada de la naturaleza del árbol (el estudio de caso de un sector específico o movimiento) sin perder la vida del bosque (las dinámicas constantes y cambiantes del campo de una nación específica adentro de la actual globalización de la agricultura).

Finalmente, una gran porción de la escolaridad revisada en este ensayo se ha enfocado en las políticas estatales o las estrategias de los movimientos rurales hacia el Estado. Sin embargo, muy pocos académicos tratan explícitamente la concepción del Estado o se refieren a las discusiones teóricas alrededor de la teoría del Estado. Pocos académicos intentan teorizar qué es específico o particular sobre la forma en que el Estado asume el conflicto social sobre los recursos. Mientras en el libro editado por Carmen Diana Deere y Frederick Royce, *Rural Social Movements in Latin America*, el análisis de las políticas estatales por los representantes del movimiento social y los académicos activistas contrastan con la concepción pluralista del Estado. A causa de la centralidad del Estado en la mayoría de las investigaciones, ya sea explícitamente reconocido o no, parece que hay una necesidad de traer de vuelta al Estado (otra vez), no solamente teóricamente pero también a través de una discusión teóricamente sofisticada sobre la naturaleza y el rol del Estado en el proceso continuo de la globalización neoliberal del campo, o en los emergentes modelos de desarrollo post-neoliberales.

Considerando la extrema complejidad del proceso de transformación rural en América Latina y la diversidad de experiencias organizacionales y estrategias políticas de movimientos rurales, un solo libro no podría proporcionar una imagen completa de los nuevos rostros del campo en América Latina. Por ende, activistas, estudiantes y académicos debería leer *Rural Social Movements in Latin America. Organizing for Sustainable Livelihoods* para tener una idea clara de esta diversidad. Deberían leer *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?* Estado, movimientos sociales campesinos y soberanía alimentarias para entender cuáles han sido los principales logros o retrocesos políticos de los movimientos rurales sociales más 'exitosos' que se han vinculado con el Estado a través de alianzas con partidos políticos, y qué nuevas contradicciones están emergiendo de estas alianzas in-

cómodas. *Campesinato e agronegócio na América Latina: a questiao agraria atual* es una lectura obligada para cualquiera que busque un análisis teóricamente informado sobre los discursos y estrategias de los agro-negocios y los gobiernos, así como las respuestas de los movimientos campesinos. Finalmente, *Autonomías y Emancipaciones. América Latina en Movimiento* debería ser consultada por los interesados ya que refleja la potencial alternativa de algunos de los más importantes movimientos sociales en la región.

Leandro Vergara-Camus,  
Departamento de Estudios de Desarrollo,  
Facultad de Estudios Orientales y Africanos,  
Universidad de Londres.

## Bibliografía

- Alvarez, S. y A. Escobar, ed. (1992). *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy and Democracy*. Boulder, CO: Westview Press.
- Arsel, M. (2012). 'Between "Marx and Markets"? The State, the "Left Turn" and Nature in Ecuador'. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 103 (2): 150–63.
- Arsel, M. y N. Avila Angel (2012). ' "Stating" Nature's Role in Ecuadorian Development: Civil Society and the Yasuní-ITT Initiative'. *Journal of Developing Societies*, 28 (2): 203–27.
- Becker, M. (2011). 'Correa, Indigenous Movements, and the Writing of a New Constitution in Ecuador'. *Latin American Perspectives*, 38 (1): 47–62.
- Cunha, C.M. y R.S. Gonçalves (2010). 'The National Development Plan as Political Economy Strategy in Evo Morales's Bolivia: Accomplishments and Limitations'. *Latin American Perspectives*, 37 (4): 177–96.
- De Grammont, H.C. y H. MacKinlay (2009). 'Campesino and Indigenous Social Organizations Facing Democratic Transition in Mexico, 1938–2006'. *Latin American Perspectives*, 36 (4): 21–40.
- Dressler, W., B. Buscher, B. Schoon, D. Brockington, T. Hayes, C. Kull, J. McCarthy and K. Shrestha, (2010). 'From Hope to Crisis and Back Again? A Critical History of the Global CBNRM Narrative'. *Environmental Conservation*, 37 (1): 1–11.
- Edelman, M. (2008). 'Transnational Organizing in Agrarian Central America: Histories, Challenges, Prospects'. *Journal of Agrarian Change*, 8 (2–3): 229–57.
- Esteva, G. (2010). 'From the Bottom-Up: New Institutional Arrangements in Latin America'. *Development*, 53 (1): 64–9.
- Fernandes, B.M. (2005). 'The Occupation as a Form of Access to Land in Brazil: A Theoretical and Methodological Contribution'. In *Reclaiming the Land: The Resurgence of*



- Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*, eds S. Moyo and P. Yeros, 311–40. London: Zed Books.
- Gudynas, E. (2011). 'Buen vivir: Today's Tomorrow'. *Development*, 54 (4): 441–7
- Hale, C. (2004). 'Rethinking Indigenous Politics in the Era of the "Indio Permitido" '. *NACLA Report on the Americas*, 32 (2): 16–21.
- Holloway, J. (2002). *Change the World without Taking Power: The Meaning of Revolution Today*. London: Pluto.
- Moore, B. Jr, (1966). *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Boston: Beacon Press.
- Thomson, B. (2011). 'Pachakuti: Indigenous Perspectives, *buen vivir*, *sumaq kawsay* and Degrowth'. *Development*, 54 (4): 448–54.
- Vergara-Camus, L. (2011). 'Globalisation, tierra, subsistencia y autonomía'. *Revista Mexicana de Sociología*, 73 (3): 387–414.
- Vergara-Camus, L. (2009). 'The MST and the EZLN's Struggle for Land: New Forms of Peasant Rebellions'. *Journal of Agrarian Change*, 3 (9): 365–91.
- Walsh, C. (2010). 'Development as *buen vivir*: Institutional Arrangements and (De)colonial Entanglements'. *Development*, 53 (1): 15–21.
- Webber, J. (2012). 'From Left-Indigenous Insurrection to Reconstituted Neoliberalism in Bolivia: Political Economy, Indigenous Liberation, and Class Struggle, 2000–2011'. In *The New Latin American Left: Cracks in the Empire*, eds J. Webber and B. Carr, 149–89. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Zibechi, R. (1999). *La Mirada horizontal: movimientos sociales y emancipación*. Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad.